

Resolución sobre la Crisis Institucional, Económica, Social y de Seguridad en Colombia

Bajo el gobierno de Gustavo Petro, el país se enfrenta a un alarmante deterioro institucional, una economía en declive, una creciente inseguridad y tensiones sociales que amenazan la estabilidad nacional. Las acciones del gobierno, cada vez más autoritarias, están erosionando la democracia y el estado de derecho, poniendo en grave riesgo el futuro del país. Es por lo anterior que la IDC-CDI solicita:

Denunciar la crisis institucional, económica, social y de seguridad que ha provocado el gobierno de Gustavo Petro, cuyo mal manejo ha sumido al país en la inestabilidad y la desconfianza hacia sus instituciones. Las políticas y prácticas adoptadas por el actual gobierno han debilitado los cimientos democráticos, afectando el bienestar de millones de colombianos.

Condenar la sistemática persecución judicial y política dirigida contra los líderes de la oposición, quienes son víctimas de procesos legales fabricados para acallarlos y excluirlos del escenario político. Estas prácticas representan una flagrante violación al derecho de oposición y constituyen un ataque directo a los valores democráticos.

Rechazar con firmeza los ataques continuos contra la prensa libre e independiente en Colombia, orquestados por el gobierno de Gustavo Petro para intimidar, censurar y silenciar las voces críticas. Estos actos de represión vulneran derechos fundamentales y buscan eliminar la libertad de expresión, elemento esencial para la democracia.

Resaltar el evidente debilitamiento de la democracia bajo el régimen de Gustavo Petro, quien ha mostrado una clara intención de concentrar el poder, socavando la separación de poderes e intentando manipular las instituciones para sus propios fines. Estas acciones están encaminadas a perpetuar un sistema que se aleja de los principios democráticos.

Exhortar a la comunidad internacional a condenar las prácticas autoritarias del gobierno colombiano y a expresar su respaldo a las instituciones democráticas, la sociedad civil y los líderes opositores que luchan por preservar la libertad y los derechos humanos en Colombia. Es vital que la comunidad global no permanezca en silencio ante el deterioro democrático que ocurre en el país.

Reafirmar el compromiso de la IDC-CDI con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa, y apoyar decididamente a quienes en Colombia trabajan por restaurar el respeto al orden democrático y la institucionalidad. La IDC-CDI se compromete a ser una voz firme contra los abusos de poder y las amenazas a la democracia en la región.

Exigir que los foros internacionales tomen medidas contundentes para presionar al gobierno de Colombia a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, libertades civiles y procesos democráticos. La IDC-CDI insta a que se implementen sanciones y mecanismos diplomáticos que promuevan la transparencia, el respeto a la oposición y la libertad de expresión en el país.